

109-A-16

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las once horas del día uno de abril de dos mil diecinueve.

I. El presente procedimiento administrativo sancionador inició mediante aviso recibido vía Twitter el día doce de julio de dos mil dieciséis contra el señor Juan Rafael Barahona Herrera, Operador, en el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante MOP) a quien se le atribuye la posible infracción al deber ético de “*Utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados*” regulado en el artículo 5 letra a) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) por cuanto según el informante habría utilizado maquinaria pesada propiedad de dicha institución para la construcción de un parqueo en un terreno particular que colinda con la gasolinera Alba Petróleos ubicada en las cercanías del Puente San Marcos Lempa, Carretera El Litoral.

II. A partir de la investigación de los hechos y la recepción de prueba que este Tribunal encomendó al instructor, se obtuvieron los siguientes resultados:

a) Durante el período comprendido entre el día uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis el señor Juan Rafael Barahona Herrera ejerció el cargo de Operador en el MOP (fs. 50 al 54).

b) El señor Barahona Herrera tenía como funciones básicas operar la maquinaria para conformación y nivelación de calles y carreteras; balastar carreteras y caminos vecinales para que las personas tengan mejores accesos a sus comunidades; llevar bitácora de recorrido semanal con el objetivo de tener un control sobre el kilometraje y el combustible, entre otras (fs. 55 al 57).

c) Los inmuebles ubicados en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] identificados con las matrículas [REDACTED], respectivamente, son propiedad del señor [REDACTED] el primer inmueble mencionado, tiene [REDACTED] [REDACTED] (fs. 59 al 75).

d) En el año dos mil once el MOP adquirió la Motoniveladora con código 01-10-13-006 por medio de una donación del Gobierno de Japón (fs. 77 al 121).

e) El día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis el investigado tenía asignada la Motoniveladora con código 01-10-13-006, con la cual ejecutó tareas de balastrado desde El Cantón Tres Calles hacia Cantón El Jícaro, ambos del municipio de San Agustín, departamento de Usulután; y, el combustible suministrado a la Motoniveladora referida en el período indagado, fue proporcionado por la Dirección del MOP de la zona oriental y la Comunidad del Cantón Tres Calles a través de su Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal, quienes fueron los que inicialmente solicitaron el apoyo a dicha municipalidad (fs. 127, 131 al 133).

f) En razón del “Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Ejecución del Proyecto Apertura, Conformación y Balastado Parcial de Caminos Vecinales del Municipio de San Agustín, Departamento de Usulután”, existía un acuerdo entre el MOP y la Municipalidad

de San Agustín, para realizar tareas de mejoramiento de la infraestructura vial de ese municipio, en la cual se incluía la Calle del Cantón el Jícaro, utilizando la Motoniveladora con código 01-10-13-006 para realizar tareas de balastrado en el Cantón Tres calles y Cantón el Jícaro (fs. 122 al 127).

g) El resguardo de la Motoniveladora con código 01-10-13-006, era responsabilidad de la Alcaldía Municipal de San Agustín; por tanto, la municipalidad decidió junto a la ADESCO del Cantón Tres Calles, resguardarla ocasionalmente en la Gasolinera Alba Petróleos Tierra Blanca, ubicada frente al Desvío del Cantón Tres Calles, con el propósito de suministrar de combustible de manera eficaz a esa maquinaria, debido a la corta distancia que hay entre ese lugar y la zona de trabajo, acuerdo que se negoció con el dueño de dicha gasolinera de forma verbal (fs. 122 al 127 y 131 al 133).

III. Ahora bien, según el aviso recibido, el investigado habría utilizado maquinaria pesada propiedad del MOP para la construcción de un parqueo en un terreno particular que colinda con la gasolinera Alba Petróleos ubicada en las cercanías del Puente San Marcos Lempa, Carretera El Litoral.

No obstante, de la descripción efectuada en el considerando II es dable indicar que, en el caso particular, a partir del sustrato probatorio que obra en el expediente ha determinado que no existen elementos que indiquen que durante el periodo investigado, el señor Juan Rafael Barahona Herrera habría utilizado la Motoniveladora código 01-10-13-006 propiedad del MOP para la construcción de un parqueo en un terreno particular sino que, por el cargo que desempeñaba en el MOP, Operador, realizó las funciones que le correspondían en la ejecución de un proyecto institucional llevado a cabo por la Alcaldía Municipal de San Agustín y el MOP.

Con base a lo anterior, se advierte que el término de prueba finalizó sin que con las diligencias de investigación efectuadas, este Tribunal haya obtenido prueba que acredite la ocurrencia de los hechos objeto de análisis.

Ciertamente, el instructor delegado efectuó su labor investigativa en los términos en los que fue comisionado por este Tribunal, pero ésta no le permitió obtener medios de prueba distintos a los ya enunciados para establecer las conductas atribuidas al investigado, por las razones planteadas.

IV. El art. 97 letra c) del Reglamento de la LEG, establece el sobreseimiento como forma de terminación anticipada del procedimiento *cuando concluido el período probatorio o su ampliación no conste ningún elemento que acredite la comisión de la infracción o la responsabilidad del investigado.*

Indiscutiblemente, para que la autoridad administrativa imponga una sanción a un sujeto infractor en un procedimiento administrativo sancionador, por una parte, la conducta debe ser típica a luz de lo establecido en la LEG, pero además, debe ser provisto de elementos probatorios que acrediten los hechos sometidos a su conocimiento.

No constando en este procedimiento elementos que acrediten las conductas objeto de investigación, ni advirtiéndose la oportunidad de obtener medios de prueba distintos a los ya

enunciados en el considerando II de esta resolución, no es posible para este Tribunal efectuar un juicio de valoración probatoria, siendo imposible continuar con el trámite de ley correspondiente.


Por tanto, y con base a lo dispuesto en los artículos 97 letra c) del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental, este Tribunal **RESUELVE**:

Sobreséese el presente procedimiento iniciado por aviso contra el señor Juan Rafael Barahona Herrera.

Notifíquese.



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN



Co9